



PCSJO21-851

Bogotá, D. C., 29/11/2021

Doctor
JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO
Ministro
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Carrera 8 No. 6C - 38
Ciudad

Asunto: Solicitud: Expedir los decretos de la Bonificación judicial regulada en los Decretos 383 y 384 de 2013 con carácter salarial para efectos de liquidar prestaciones sociales y cesantías a los servidores judiciales del país.

Señor ministro,

De conformidad con lo consagrado en nuestra Constitución Política, artículo 150, numeral 19, literal E, el Congreso de la República tiene la facultad de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública; en ejercicio de esta facultad, expidió hace cerca de 30 años, la Ley 4ª de 1992 ***"Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política"***; en ella se autorizó al Gobierno Nacional, sin restricción alguna, para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, en los que incluye a los servidores judiciales. Así mismo, determinó el Legislador que para el efecto se debe tener en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes **objetivos y criterios**: I) el respeto de los derechos adquiridos del régimen general, como de los especiales; II) la sujeción al marco general de la política macro económica y fiscal; III) la racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad; IV) El nivel de los cargos en cuanto a la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y, V) las calidades exigidas para su desempeño.

De manera que, en virtud de lo establecido en la citada Ley, la potestad para fijar los emolumentos salariales y prestacionales de los servidores públicos radica actualmente en el Gobierno Nacional.

En el año 2013, el Presidente de la República con los Ministros del ramo, principalmente la cartera a su digno cargo Hacienda y Crédito Público y el Departamento de la Función Pública, después de más de 20 años y en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 4 (como expresamente lo prevé el texto del decreto), expidieron el Decreto 0383 del 6 de marzo de 2013, "Por el cual se crea una Bonificación Judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones", normativa que estableció lo siguiente:

*"... **ARTÍCULO 1.** Créase para los **servidores de la Rama Judicial** y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una Bonificación Judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud."... (Subrayado fuera de texto).*

Igualmente, en ejercicio de las facultades de la Ley 4, profirió el Decreto 384 de 2013 "por el cual se crea una Bonificación Judicial para los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial y se dictan otras disposiciones". Esta Bonificación Judicial se reconoce a partir del 1º de enero de 2013 y se percibe mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio.

Los anteriores decretos han sido modificados en algunos aspectos, por los decretos 1269 de 2015 y 246 de 2016, sin afectar la orientación en cuanto a que la Bonificación Judicial, creada mediante los decretos 383 y 384 de 2013, únicamente constituyen factor salarial para la base de cotización de los Sistemas Generales de Pensiones y Salud.

Los precitados Decretos en su respectivo artículo 3º, consignaron la siguiente previsión legal:

*"...**ARTÍCULO 3o.** Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos. ..."* (Subrayas propias).

Teniendo en cuenta lo dispuesto por las normas en cita, es claro que la **Bonificación Judicial**, no constituye factor salarial, y exclusivamente concede estos efectos para el cálculo de la base de cotización de los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Pensiones; adicionalmente ratificó el Gobierno Nacional que, cualquier modificación, ajuste o variación de las normas que consagran el régimen salarial o prestacional de los servidores públicos, es de la exclusiva competencia de Gobierno Nacional.

Por su parte los beneficiarios de la Bonificación Judicial, inconformes con la disposición legal consistente en que la **Bonificación Judicial** únicamente tenga carácter salarial para aportes al Sistema de Seguridad Social, desde el mismo año de expedición de los decretos precitados, han interpuesto demandas en contra de la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el propósito de reclamar ese carácter salarial para efectos de liquidar las prestaciones sociales y cesantías, exponiendo, entre otros argumentos, que la bonificación por hacer parte de la asignación salarial debe tener carácter salarial para todos los efectos, por cuanto se percibe de manera periódica y

habitual, respaldados en jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Igualmente han presentado demandas de simple Nulidad ante el Consejo de Estado contra los decretos 383 y 384 de 2013, referidos en este escrito.

Ahora bien, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como Entidad demandada, al ejercer la defensa judicial en estos casos, ha fundamentado su argumentación, entre otros, en jurisprudencia del Consejo de Estado¹, en la cual se ratificó el carácter no salarial de la Bonificación por Actividad Judicial regulada en el Decreto 3131 de 2005, por considerar que las normas que la regulan no desconocieron ningún derecho adquirido, así como tampoco violaron normas constitucionales y legales. De manera que, invocando esta providencia, se ha venido exponiendo ante los estrados judiciales que el legislador, facultado por la Constitución puede fijar los emolumentos salariales y prestacionales de los servidores públicos y otorgarle o no el carácter el salarial para liquidar algunos conceptos. De manera que no pueden considerasen los Decreto 383 y 384 de 2013, y demás decretos reglamentarios, inconstitucionales, ilegales o violatorios de pactos internacionales.

Igualmente, en aras de la defensa de la entidad, se han traído a colación las sentencias de la Corte Constitucional, C-279 de 1996, C-444 de 1997 y SU-395 de 2017, la primera, que declaró exequible el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y determinó que la prima especial creada en esa disposición no tendría carácter salarial para ningún efecto, con fundamento en la libertad otorgada por la Constitución al legislador; la segunda, que declaró exequible la Ley 332 de 1996, que modificó el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en cuanto a que concedió efecto salarial a dicha prima, para aportar al Sistema General de pensión, excluyendo a quienes ya estaban pensionados y, la tercera, estableció que no existe motivo fundado de los preceptos constitucionales que impidan al legislador determinar que una prestación social o indemnización no tenga carácter salarial.

Los argumentos de defensa judicial de la entidad anteriormente expuestos, no están prosperando. En efecto los Conjuces, Jueces Transitorios y Magistrados de Salas Transitorias de los Tribunales Administrativos, que conocen de estas demandas, vienen condenado a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la reliquidación de prestaciones sociales y cesantías de manera retroactiva (aplicando prescripción trienal dependiendo cada caso) y en lo sucesivo, con la inclusión de la Bonificación Judicial como factor de salario, con argumentos como los que pasamos a citar:

“En consecuencia, para el Tribunal, de la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contemplada en el artículo 1º del Decreto 383 de 2013, solo la palabra “únicamente” resulta contraria a lo establecido en los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, y Convenio 95 de la OIT, en relación con los artículos 26 de la C.A.D.H. y 4 del Protocolo de San Salvador adicional a ésta, por cuanto constituye una exclusión irracional y violatoria de los contenidos materiales de la Carta Magna al desconocer la protección especial al trabajo de los servidores públicos de la Rama Judicial en condiciones dignas y justas y la primacía de la realidad sobre las formalidades, pues, no es la calificación que hace el legislador lo que determina si un factor es salario, sino la naturaleza habitual y periódica de la remuneración, por lo tanto,

¹ Sentencia del 19 de junio de 2008, Radicación número: 11001-03-25-000-2006-00043-00 (0867-06), Actor: PABLO J. CACERES CORRALES, Consejero ponente: Dr. JAIME MORENO GARCIA

confirmará la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 4º de la Constitución Política, adoptada por el Juzgado, pero, modificará la parte resolutive en el sentido que solo será inconstitucional la palabra "únicamente" contenida en citada frase del artículo 1 del Decreto 383 de 2013, para lo cual se atenderá lo previsto en el artículo 148 del C.P.A.C.A., que dispone: "En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos inter partes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley. La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo sólo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte".
(...)

Por estas mismas razones, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, no debió negar la reliquidación pedida por el demandante, habida cuenta que pudo aplicar la excepción de inconstitucionalidad ya analizada, respecto de la frase "únicamente" contenida en el artículo 1 del Decreto 0383 de 2013, que fue la base para excluir la Bonificación Judicial de ser para la liquidación de todas las prestaciones sociales a excepción de la cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, con fundamento en que ese derecho sí constituye factor salarial, y en aplicación de los principios mínimos fundamentales de los derechos de los trabajadores establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política, de la primacía de la realidad sobre las formalidades, irrenunciabilidad del salario y remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.²

En el mismo sentido de la anterior sentencia, se han proferido otras en las que se acceden a las pretensiones de los demandantes en un porcentaje del 99.8%.

En el nivel central³, como se indica en el siguiente consolidado:

1	884	231	654	885
---	-----	-----	-----	-----

A nivel seccional, en el año 2021, se proferieron las siguientes sentencias:

29	1445	1407	67	1474
----	------	------	----	------

Adicionalmente, cabe destacar que actualmente a nivel nacional, existen a la fecha un total de **5711 procesos en curso**, en los cuales, los demandantes reclaman el carácter salarial de la Bonificación Judicial, acumulando un valor de pretensiones por la suma de \$220.542.727.390,28 e igualmente muchos servidores están anunciando el inicio de litigios contra la Entidad, a efecto de que se les reconozca a su favor el carácter salarial de esta Bonificación.

² Sala Transitoria – Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sentencia del 29 de octubre de 2021, M.P. Dr. Luis Eduardo Pineda Palomino, Exp. 11001333500920170024902, Dte. ORLANDO MEJÍA APARICIO.

³ Procesos de los Juzgados Administrativos de Bogotá, Facatativá, Zipaquirá, Girardot y Leticia, Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto, actualmente se encuentran en curso, diferentes demandas de control de nulidad simple, en el Consejo de Estado, mediante las que se solicita la nulidad plena de los Decretos 382, 383 y 384 de 2013, que crearon la Bonificación Judicial para servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, de la Rama Judicial, de la Justicia Penal Militar, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Direcciones Seccionales de Administración Judicial, referidos anteriormente en este escrito. Estas Demandas, por pasiva, también han sido incoadas como parte demandada a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho y Departamento Administrativo de la Función Pública y se vinculó como terceros con interés directo a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación.

A la fecha, se encuentran los siguientes procesos identificados, en los que nos vincularon y que hemos sido notificados:

11001032500020160092900	Consejo de Estado	4248-16	Adriana Vivas Arevalo
11001032500020160092800	Consejo de Estado	4244-16	Alberto Santiago Roza Muñoz
11001032500020160093400	Consejo de Estado	4253-16	Aleyda Bocanegra Chaparro
11001032500020160105100	Consejo de Estado	4759-16	Ana Irma Sánchez Largo
11001032500020160086100	Consejo de Estado	3983-16	Ana María Amaya Piedrahita
11001032500020160082300	Consejo de Estado	3844-16	Ángel Gabriel Moyano Jara
11001032500020160105200	Consejo de Estado	4761-16	Beatriz Montes Arenas
11001032500020160101100	Consejo de Estado	4559-16	Blanca Istená Cárdenas Rubio
11001032500020180002100	Consejo de Estado	0065-18	Cesar Augusto Ortiz Perdomo
11001032500020130076900	Consejo de Estado	1533-13	Cesar Augusto Saavedra Madrid
11001032500020160116900	Consejo de Estado	5246-16	Clara Adriana Montañez Hernández
11001032500020160105000	Consejo de Estado	4760-16	Clara Nayibe Pepinosa Rosas
11001032500020170012400	Consejo de Estado	0639-17	Cristian Yeison Díaz Páez
11001032500020160087800	Consejo de Estado	4016-16	Danny Efraín Rubio Cabrejo
11001032500020160117200	Consejo de Estado	5249-16	Didasio Jiménez Moreno
11001032500020160087300	Consejo de Estado	4001-16	Dora Concepción Ahumada Rojas
11001032500020160087200	Consejo de Estado	4000-16	Edy Josue Cifuentes Arévalo
11001032500020160086400	Consejo de Estado	3986-16	Emiro Antonio Camachi Cuesta
11001032500020160101400	Consejo de Estado	4562-16	Esperanza Beatriz Bonilla Lozano
11001032500020160086800	Consejo de Estado	3990-16	Gustavo Medina Bustos
11001032500020160093800	Consejo de Estado	4257-16	Jaime De Jesús García De León
11001032500020160087500	Consejo de Estado	4007-16	José De Jesús Rivera Guzmán
11001032500020150094900	Consejo de Estado	3840-15	José Raymundo Fragozo Corrales
11001032500020160117300	Consejo de Estado	5250-16	Juan Carlos Ismael Reyes Restrepo
11001032500020160086000	Consejo de Estado	3982-16	Juana Marcela Acosta Cortes
11001032500020180005000	Consejo de Estado	0163-18	Lianna Yaneth Laiton Díaz

11001032500020130107600	Consejo de Estado	2480-13	Ligia Marlen Gutiérrez Ortiz
11001032500020160116700	Consejo de Estado	5244-16	Lucy Marcela Laborde Betancourt
11001032500020160087400	Consejo de Estado	4002-16	Luisa Esperanza Fajardo Segura
11001032500020160085900	Consejo de Estado	3981-16	Magda Guadalupe Del Carmen Ahumada Rojas
11001032500020160087600	Consejo de Estado	4008-16	Maria Clara Espitia Ramírez
11001032500020160117000	Consejo de Estado	5247-16	Maria Eugenia Roza Gil
11001032500020180107200	Consejo de Estado	3845-18	Mario William Hernández Muñoz
11001032500020160093000	Consejo de Estado	4249-16	Martha Cecilia Trespalacios Rangel
11001032500020150037800	Consejo de Estado	0784-15	Nelly Rocío Yepes Mayorga
11001032500020150085000	Consejo de Estado	3117-15	Nelly Rocío Yepes Mayorga
11001032500020150092100	Consejo de Estado	3505-15	Nelly Rocío Yepes Mayorga
11001032500020160093100	Consejo de Estado	4250-16	Nubia Janneth Ortiz Serrano
11001032500020180002200	Consejo de Estado	0067-18	Nury Navarro Chaparro
11001032500020160086500	Consejo de Estado	3987-16	Ricardo Castro Mogollón
11001032500020170040900	Consejo de Estado	1971-17	Ruddy Henry Gómez Yepes
11001032500020160117100	Consejo de Estado	5248-16	Sandra Milena Cifuentes Peña
11001032500020160116800	Consejo de Estado	5245-16	Yonis González Guzmán
11001032500020160086300	Consejo de Estado	3985-16	Yureima Pilar Balaguera Camargo
11001032500020180159700	Consejo de Estado	5219-18	Anyela Marcela Romero Rodríguez
11001032500020170012500	Consejo de Estado	0640-17	Jina Lizbeth Mora González
11001032500020180104300	Consejo de Estado	3300-18	Beatriz Fajardo Gallego
11001032500020180171000	Consejo de Estado	6055-18	Diana Carolina Useche Bohórquez
11001032500020180032500	Consejo de Estado	1349-18	Yolima Haydee Remarchuk León
11001032500020180115600	Consejo de Estado	4032-18	Yudi Alejandra Hernández Rodríguez
11001032500020180111300	Consejo de Estado	3986-18	Martha Isabel Urrego Mancera
11001032500020160101600	Consejo de Estado	4564-16	María Teresa Martínez
11001032500020180107300	Consejo de Estado	3846-18	Gustavo Pacheco Castañeda
11001032500020180088200	Consejo de Estado	3117-18	Luz Adriana Gutiérrez Mejía
11001032500020180133400	Consejo de Estado	4481-18	Juan Carlos Barrera Santos

Con fundamento en lo anterior, las Organizaciones Sindicales de la Rama Judicial, en su calidad de representantes y voceros de los intereses y derechos de los servidores públicos adscritos a la rama judicial: i). Asonal Judicial; ii). Asonal Judicial S.I; iii). Semjud; iv). Sintranivelar Comuneros; v). Asojusur; y vi), Asojudiciales, en el marco de la Negociación Colectiva, vigencia 2021 a 2022, presentaron pliego de solicitudes unificado de negociación colectiva conforme a lo previsto en el Decreto 160 de 2014, en el que solicitaron, entre otros aspectos, lo siguiente:

"... en acatamiento de los sucesivos pronunciamientos judiciales que reconocen la Bonificación Judicial establecida en los Decretos 383 y 384 de 2013, como factor salarial, el Consejo de Superior de la Judicatura se obliga a gestionar ante el Gobierno Nacional, en un plazo máximo de seis (6)

meses contados a partir de la suscripción del presente Acuerdo Colectivo, para que se expidan los decretos que permitan la incorporación de la Bonificación Judicial como factor salarial para efectos de liquidación de prestaciones sociales, como primas, bonificación por servicios prestados y cesantías".

Después de las deliberaciones y argumentaciones reciprocas entre nuestra Entidad como administración judicial y los Sindicatos, acordamos:

Reconocimiento del Carácter Salarial de la Bonificación Judicial. Se traslada a la Mesa Central. El Consejo Superior de la Judicatura coadyuvará a las Organizaciones Sindicales de la Rama Judicial en la solicitud de reconocimiento del carácter salarial de la bonificación judicial para la liquidación de las prestaciones sociales, para lo cual aportará, estadísticas de litigiosidad, el impacto fiscal y el soporte jurídico sobre el tema.

Igualmente, se instará al gobierno nacional para que realice las apropiaciones presupuestales necesarias para el cumplimiento de las sentencias en firme, en las que se reconozca el carácter salarial de la bonificación judicial, para evitar detrimento patrimonial del Estado.

PETICION:

Teniendo en cuenta la reiteración de los fallos condenatorios en contra de la Rama Judicial y honrando el compromiso adquirido dentro del proceso de negociación con los sindicatos de la Rama Judicial, solicitamos de manera respetuosa al Ministerio a su cargo y por su conducto al Gobierno Nacional, se expidan los decretos correspondientes a la Bonificación Judicial, en los que se incluya el carácter salarial para la liquidación de las prestaciones sociales a efectos de que sean concordantes con los pronunciamientos de los jueces del país que otorgan a la Bonificación Judicial regulada en los Decretos 383 y 384 de 2013 dicho carácter salarial, con el fin de evitar las representativas sumas derivadas de las condenas a las que está y probablemente estaría sometida la Rama Judicial; así como el impacto fiscal de las mismas, por el pago de indexaciones e intereses, los cuales afectan considerablemente el erario de la Nación.

Finalmente, solicitamos se realicen las apropiaciones presupuestales correspondientes, con el fin de impedir la mora en el pago y la iniciación de procesos ejecutivos que han conllevado al embargo de cuentas de la entidad, incluyendo las de nómina, ocasionados por las más de 2500 condenas que a la fecha debe cumplir esta entidad y las futuras, como se indica en el presente oficio.

ESTIMATIVO IMPACTO ECONÓMICO: En el evento que la bonificación judicial se constituya en factor salarial, el impacto presupuestal anual, ascendería a costos de 2021, a **\$456.337.128.580** distribuidos así:

➤ Prestaciones sociales:	\$257.241.052.209
➤ Contribuciones inherentes a la nómina:	\$199.096.076.371
➤ Total Costo Adicional:	\$456.337.128.580



Las prestaciones sociales de los servidores judiciales que tendrían un costo adicional serían la prima de productividad, la bonificación por servicios prestados, la prima de vacaciones, la prima de servicios y la prima de navidad.

Por su parte, las contribuciones inherentes a la nómina se refieren al incremento en los aportes al sistema de seguridad social integral, cajas de compensación familiar, SENA, ICBF, institutos industriales y ESAP, así como el mayor valor del auxilio de cesantías y sus respectivos intereses.

Cordial saludo,



GLORIA STELLA LÓPEZ JARAMILLO
Presidente



JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ
Director Ejecutivo de Administración Judicial

Copia: Dr. **Camilo Alberto Gómez Alzate**, Director Agencia Defensa Jurídica del Estado

Elaboró: Angélica Paola Arévalo Coronel – Profesional Universitario – División de Procesos

Proyección Impacto. Luis Antonio Suarez Alba - Director Unidad de Planeación

Revisó y aprobó: Belsy Yohana Puentes Duarte – Directora División de Procesos

Pedro Julio Gómez Rodríguez – Director Unidad de Asistencia Legal

Anexos:

- Relación de Sentencias de segunda instancia proferidas por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en las que se condena a la Nación – Rama Judicial a la reliquidación de las prestaciones sociales y cesantías de los demandantes con la inclusión como factor salarial de la Bonificación Judicial de los Decretos 383 y 384 de 2013.